

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, trece (13) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

DEMANDANTE	: BLANCA OLIVA HOLGUÍN VÁZQUEZ
DEMANDADO	: COLPENSIONES, JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ Y GILMA SOTO GIRALDO
TIPO DE PROCESO	: ORDINARIO
RADICADO NACIONAL	: 05-001-31-05-015-2022-00185-01
RADICADO INTERNO	: 319-23
DECISIÓN	: CONFIRMA SENTENCIA
ACTA NÚMERO	: 357

En la fecha, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL, procede a emitir sentencia de segunda instancia en la que se estudia el recurso de apelación, en el proceso de la referencia. La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por el ponente, Doctor HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ, que a continuación se traduce en la siguiente decisión:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la ley 2213 del 13 de junio de 2022, la providencia en segunda instancia se profiere escrita.

ANTECEDENTES

La parte demandante solicita se declare la nulidad del dictamen emitido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez en cuanto a la fecha de estructuración. Se declare que la señora Holguín Vázquez presenta una fecha de estructuración de la invalidez anterior al fallecimiento de su padre tal y como lo estableció la junta Regional de calificación de invalidez de Antioquia y que la estructuró con fecha del 7 de mayo 2002. Como consecuencia de lo anterior se deberá condenar a Colpensiones a reconocer y pagar la sustitución pensional a la señora Holguín Vázquez en un porcentaje del 50% como consecuencia de la muerte de su padre Juan de la Cruz Holguín en su condición de hija inválida y dependiente económicamente de su padre, se ordene a Colpensiones a pagar las asignaciones insolutas que le corresponden a la actora desde el 13 de febrero 2013 fecha del fallecimiento

de su padre y hasta la fecha de cumplimiento de la sentencia. Se condene a los intereses moratorios o en subsidio la indexación, costas y agencias de derecho.

Como fundamento de los hechos plantea que el día 13 de febrero 2013 falleció el señor Juan De La Cruz Holguín Vázquez que se encontraba pensionado por Colpensiones y quién era el padre de la demandante, como consecuencia de lo anterior ella se presentó ante Colpensiones solicitando fuera calificada por medicina laboral de dicha entidad para acceder a la pensión de sobreviviente, por tener una discapacidad superior del 50% para la fecha del fallecimiento de su padre. Mediante dictamen del 2 de septiembre de 2014, Colpensiones estableció una pérdida de capacidad laboral del 56.2%, con fecha de estructuración de 14 de agosto 2014.

Al no estar de acuerdo la demandante con la fecha de estructuración interpuso recurso de reposición y el subsidio apelación, señalando que se trata de un paciente con diagnóstico de trastorno esquizofrénico con deterioro cognitivo secundario desde hace 10 años, que la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia mediante dictamen 56690 del 28 enero 2015 decide modificar el dictamen emitido por Colpensiones para una pérdida de capacidad laboral del 56.2%, de origen común y cuya fecha de estructuración era el 7 de mayo 2002. Por no estar de acuerdo con la anterior calificación Colpensiones interpuso recurso de apelación por efectos de la fecha de estructuración ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez quién citó en tres oportunidades a la demandante pero que por problema económico no asistió y así se lo hizo saber a la junta, quién decidió modificar el dictamen proferido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia y fijar como fecha de estructuración el 14 de agosto de 2014 es decir ratificando lo que inicialmente Colpensiones había señalado. Que la demandante el día 21 de octubre 2021 inicia nuevamente proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral ante lo cual Colpensiones señala que se debe radicar la partida de bautizo del señor Juan de la cruz Holguín, luego exigió historia la copia historia clínica completa del diagnóstico médico de la demandante por eso se envía una queja ante Colpensiones. Que la demandante dependió económicamente toda su vida de su padre. Agrega que mediante resolución GNR 266.110 del 23 de octubre 2013 reconoció una pensión de sobreviviente a favor de la señora Gilma Soto Giraldo en calidad de compañera permanente en un 50% y dejó el otro 50% restante en suspenso a favor de la señora Holguín Vázquez y posteriormente a través de la resolución 378 508 del 25 de noviembre de 2015,

le reconoció un 100% la pensión de Sobreviviente a favor de la señora Soto Giraldo Gilma

RESPUESTA A LA DEMANDA

COLPENSIONES señala frente a los hechos que es cierta la muerte del causante. Igualmente, que fue calificada por la entidad con una pérdida de capacidad laboral del 56.2% de origen común con fecha de estructuración del 14/08/2014, por lo cual fue Interpuesto recursos de reposición y apelación. Que es cierto todo lo que se documenta en la demanda, lo demás son apreciaciones de la parte demandante. Se opone a las pretensiones y propone como excepciones de mérito: la inexistencia de la declaratoria de nulidad del dictamen, inexistencia de la obligación de reconocer la pensión de invalidez, improcedencia de los intereses moratorios sin procedencia de la indexación, prescripción, buena fe de la entidad, imposibilidad de condena en costas, y solicita que se descuenten en salud en caso de desestimarse las pretensiones

LA JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ da contestación a la demanda señalando en cuanto a los hechos que no le consta la fecha de defunción del señor Juan de la Cruz, que es cierto que se calificó por parte de Colpensiones igual que la Junta Nacional de Calificación con una fecha de estructuración del 14 de agosto 2014, pero que no es cierto que la paciente presenta un diagnóstico esquizofrenia desde 2002, pues la sola ocurrencia o aparición de la patología no genera el estado de invalidez sino hasta que se documentó la evolución del diagnóstico y el tratamiento suministrado, las limitaciones permanentes y definitivas es decir cuando se evidenció en su historial clínico un deterioro cognitivo que es verificado a cabalidad el 14 de agosto 2014. Que, ante la inasistencia de la demandante en tres oportunidades a la junta, se procedió a emitir el dictamen con la información contenida en el expediente de calificación. No le constan del hecho décimo al décimo séptimo por ser circunstancias ajenas a la entidad se opone a todas las pretensiones y propone como excepciones: La legalidad de la calificación y el dictamen expedido por la junta nacional, buena fe de la parte demandada

El Juzgado mediante auto ordena integrar a la señora GILMA SOTO GIRALDO al proceso dado que a ella se le reconoció la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento del señor Juan De La Cruz Holguín (PDF 11) y mediante PDF 17 se da contestación por parte de la curadora al Litem en representación de la señora Gilma Soto Giraldo señalando que son ciertos los hechos de la muerte

del señor Juan de la cruz. Igualmente, que es cierto que se presentaron los documentos para el reconocimiento de la pensión por parte de su hija, al igual que todas las actividades realizadas en la Junta Regional y Junta Nacional de calificación. Lo demás no le consta. Frente a las pretensiones no se opone a las mismas pues están dirigidas en contra un tercero y respecto a la condena resalta que no se encuentra causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado y como excepciones propone la prescripción y la genérica.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

En sentencia del 09 de octubre de 2023, el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín, ABSOLVIO a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, a la JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ y a la señora GILMA SOTO GIRALDO de todas y cada una de las pretensiones incoadas en su contra por la señora BLANCA OLIVIA HOLGUÍN VÁSQUEZ, DECLARA implícitamente resueltas la totalidad de las excepciones planteadas con las contestaciones a la demanda. Las costas serán asumidas por la parte demandante vencida en juicio y fija las agencias en derecho en la suma de medio salario mínimo legal mensual vigente para el año 2023.

IMPUGNACIÓN

La parte demandante interpone recurso de apelación con base en que la señora Blanca oliva presenta una pérdida de capacidad laboral anterior a la fecha de fallecimiento de su padre, tal como la junta de calificación de invalidez de Antioquia lo señaló, estructurada desde el año 2002 dado que se realizaron los conceptos médicos, exámenes e imagenología que se ajustaba al manual único de calificación de invalidez. Igualmente señaló que había tenido en cuenta circunstancias no previstas por Colpensiones. por ello solicita se le dé plena validez al mismo. Además, que se tengan en cuenta las sentencias de la corte constitucional donde ha determinado la pensión de sobreviviente a favor de aquellas personas que su fecha de estructuración ha sido establecida con posterioridad al fallecimiento del pensionado, cuando la persona padeció una enfermedad crónica, degenerativa o congénita como ocurre con la señora Blanca oliva. Solicita igualmente que sea revocada las costas por cuanto se trate de una persona con enfermedad mental una persona especial protección constitucional y dado que no puede tener una determinación en sí mismo. En cuanto a la dependencia económica solicita aparece en la historia clínica que es una persona que desde 2002 presenta una enfermedad mental que le ha

impedido laborar y por ello tenía una dependencia total de su padre, situación que es ratificada por la testigo. Solicita se revoque la sentencia.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

El apoderado de Colpensiones presenta escrito de alegatos en el que solicita confirmar en todas sus partes la sentencia, debido a que dicha prestación económica objeto del litigio, ya se encuentra otorgada a favor de la señora GILMA GIRALDO SOTO, mediante Resolución GNR 378508 del 25 de noviembre en un 100% en calidad de cónyuge, razón por la cual en principio se invoca la legalidad de los actos administrativos.

Respecto a lo probado en el proceso mediante la prueba documental, la práctica de pruebas testimoniales y declaración de parte resalta lo siguiente:

1. La demandante es calificada posterior a la fecha de su padre, con FECHA DE ESTRUCTURACIÓN 14 de agosto de 2014. Respecto a este punto, sea lo primero indicar que es una posterior a la fecha del fallecimiento de su padre y original del derecho el señor Juan de la Cruz Holguín Vásquez 13 de febrero de 2013, por lo cual no se cumple el primer presupuesto para ser eventual acreedora del derecho objeto de litigio, adicional a ello no se allegó prueba, como un peritaje que demostrara que hay error en el dictamen en firme y emitido por la JNCI.
 2. Si bien en los apartes de las historias clínicas aportadas indican que el demandante inicio con episodios de DEPRESIÓN, reactiva por su divorcio el 07 de mayo de 2002, cabe resaltar que las calificaciones de PCL, se realizan con base a diagnósticos consolidados y posterior a una Mejoría Medica Máxima, en razón de ello, no es posible de acuerdo al Manual Único de Calificación, indicar que esa sea la FECHA DE ESTRUCTURACIÓN.
 3. Respecto a la dependencia económica, requisito indispensable para acceder a la sustitución Pensional, se indica que no se allegó prueba si quiera sumaría al plenario, que demuestre la alegada dependencia económica de la demandante, respecto al pensionado y derivado de la prueba testimonial, solo se puede aducir incongruencias, pues la única testigo traída por la parte demandante al proceso y que ostenta la calidad de familiar, en su relato indica que la demandante siempre vivió con su padre y dependió económicamente de este, pero al interrogarle esta apoderada por el cónyuge de la demandante, indica que nunca visitó a la demandante mientras estuvo casada, pero si admite que llego a estar casada, y también indica a varias de las preguntas que no recuerda nada.
- Adicional a esto, tanto la demandante como la testigo indican que la señora BLANCA OLIVA HOLGUIN VASQUEZ, jamás ingresó al mercado laboral por su estado de invalidez, pero en las historias clínicas y en los dictámenes, indican que se encontraba laboralmente activa. Así mismo solicita no sea condenada en costas dicha entidad por obrar de buena fe.

PRONUNCIAMIENTO JURÍDICO

El problema jurídico se centra en determinar en virtud del recurso de apelación:

- i) Si hay lugar a revocar la sentencia que negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes del padre a la Sra. Blanca Oliva al no haberse declarado la nulidad del dictamen emitido por la Junta nacional de calificación de invalidez;
- ii) Si hay lugar a darle validez al dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez al determinar una fecha de estructuración distinta. III) si se deben imponer costas.

La señora juez en su sentencia señala que en ningún momento fue atacado la el dictamen pericial de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez para poder dejar sin valor el dictamen más porque dicho dictamen señala con acierto por qué la fecha de estructuración debió ser desde 2014 dado que un mero diagnóstico no alcanza una pérdida de capacidad laboral del 50% y de la prueba testimonial tampoco pudo establecerse la dependencia de esta señora a su padre pues la testigo dejó lagunas que no hace creíble su decir.

Precepto normativo

El artículo 13 de la Ley 797 de 1993, la norma vigente al momento del fallecimiento del pensionado Juan de la Cruz Holguín Vázquez acaecido el día **13 de febrero de 2013**, expresa:

Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes

[...]

c) <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente del causante al momento de su muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes ~~y cumplan con el mínimo de condiciones académicas que establezca el Gobierno;~~ y, **los hijos inválidos si dependían económicamente del causante**, ~~esto es, que no tienen ingresos adicionales,~~ mientras subsistan las condiciones de invalidez. Para determinar cuándo hay invalidez se aplicará el criterio previsto por el artículo 38 de la Ley 100 de 1993;

De la lectura de este artículo resulta claro que se debe probar primeramente la invalidez del hijo mayor de edad y segundo la dependencia económica del causante al momento de la muerte.

1. Fecha de estructuración de la invalidez

Se encuentra acreditado en el plenario y no es objeto de discusión que la demandante señora Blanca Oliva Holguín nació el día 21 de noviembre de 1951 y era hija del causante, según registro civil de nacimiento (PDF 01 fls 18 y 19), que el señor Juan de la Cruz Holguín Vázquez falleció el día 13 de febrero de 2013 según registro Civil de defunción (01 fls 22 y 23) pero que el dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral emitido por Colpensiones dio un porcentaje de pérdida de capacidad laboral de 56.2% con **fecha de estructuración 14 de agosto 2014**. (01 fls. 24 y 25) el Dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez notificado el 28 de enero de 2015 dio la misma PCL, pero con **fecha de estructuración del 7 de mayo de 2002** (01 folio fls 26 a 35) y frente al recurso interpuesto por Colpensiones, el dictamen de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez con una PCL de 56.2%, validó la **fecha de estructuración del 14 de agosto 2014 emitida por Colpensiones** (01 fls 35 a 44). Por lo anterior mediante resolución GNR 378508 del 25 de noviembre 2015 por el cual se niega la pensión de sobreviviente a la Sra. Holguín Vázquez ordenando acrecer la pensión de sobrevivientes causado por el fallecimiento del señor Juan de la cruz a favor de la señora Gilma Soto Giraldo (01 fls 48 a 51. Por lo anterior se interpone el recurso de reposición y subsidio apelación (01 fls. 52 y 53). Resolución GNR 53708 del 19 de febrero 2016 resuelve el recurso de reposición negando nuevamente la pensión de sobrevivientes a la señora demandante (01 fls 55 a 59) y nuevamente se hace solicitud de calificación de pérdida de capacidad laboral de la demandante con sus respectivas contestaciones (01 fls 60 a 81).

Corresponde a la Sala determinar a quien asiste la razón:

En PDF 10 del expediente fls 4 a 152 obra dictamen de determinación de origen, pérdida de capacidad laboral y fechas de estructuración de las juntas nacional y regional, de lo cual se extrae:

La Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia (enero 28 de 2015) frente a la objeción de revisar la fecha de estructuración de la invalidez entregada por Colpensiones, revisa apartes de la historia clínica como la del 14/08/2014 de psiquiatría que determina que esta patología es crónica y deteriorante con pronóstico de recuperación funcional malo. Medicada con ácido valproico haloperidol y biperideno. Dice que según historia clínica aportada del 7/05/2002 psiquiatría configura cuadro alucinatorio con RM secundario y esta especialidad manifiesta que es una paciente con diagnóstico de trastorno esquizoafectivo con deterioro cognitivo secundario desde hace 10

años. Que el hospital mental homo señala que la paciente tiene 51 años, oficio empleado doméstica que consultó urgencia el 5 de mayo del 2002 y que su diagnóstico fue esquizofrenia que se prescribió tratamiento de haloperidol biperideno y lorazepam hace 5 años estuvo hospitalizada en el ISS por cuadro depresivo posterior al divorcio. Opinión: trastorno esquizofrénico.

La valoración de la Junta Regional de Calificación de Invalidez señala con base en los fundamentos de hecho (conceptos médicos, exámenes clínicos y de imagenología) y de derecho y del artículo 52 de la ley 962 de 2005 calificando con el decreto 917 de 1999, la pérdida de capacidad laboral con una deficiencia de 50, una discapacidad de 20 y una minusvalía de 30%. Señala que el decreto 917 de 1999 en los artículos tercero, cuarto literal a, el artículo 41 de la ley 100 de 1993 (art 52 del decreto 019 de enero de 2012) transcribiendo la normatividad relativa al campo de aplicación, la fecha de estructuración o declaración de la pérdida de la capacidad laboral, los criterios para la asignación de la fecha de estructuración en contingencias de carácter degenerativo, señalando 4, a) fecha en que se genera en la persona pérdida de capacidad b) en forma permanente y definitiva c) debe documentarse con la historia clínica, los exámenes clínicos y de ayuda diagnostica y d) puede ser anterior o corresponder a la fecha de calificación, igualmente señala las circunstancias no previstas legalmente que lejos de depender del criterio médico para signar a fecha de estructuración, la controversia se traduce en razón a la utilidad que puede o no tener dicha fecha frente a las expectativas pensionales del paciente invalido. En el análisis y conclusión modifica el dictamen frente a la fecha de estructuración dejándola el 7 de mayo de 2002

La Junta Nacional de Calificación de Invalidez, quien allego el expediente objeto de análisis (PDF 10) en el acápite de “análisis y conclusión” señala que la fecha de estructuración designada por la Junta Regional de Calificación de Antioquia, el 7 de mayo 2002, no tendría claridad sobre el tiempo de evolución y evidencia de deterioro cognitivo, condición que solo se establece después de varios años de evolución, observando que la historia clínica de la señora Holguín Vázquez es escasa y por eso solo hasta la valoración del especialista en psiquiatría el 14 de agosto 2014 (folio 11) señaló “paciente con trastorno esquizoafectivo deterioro cognitivo secundario pronóstico de esa deterioro cognitivo con el tiempo, consideró que no era posible en este caso alcance la funcionalidad premórbida el pronóstico es malo, ni puede definirse con claridad que presenta deterioro cognitivo secundario en la enfermedad de base y con pronóstico desfavorable de recuperación”, razón por la cual es esta la fecha

que corresponde a la estructuración de su estado invalidez por ello se ordena por la Junta nacional modificar el dictamen emitido por la junta Regional de Antioquia en cuanto a la fecha de estructuración quedando está el 14 de agosto 2014, cuando la Sra. Holguín alcanza un porcentaje del 50% con la consolidación de sus condiciones clínicas que corresponden al diagnóstico esquizofrenia indiferenciada, condición que genera una secuela que produjo un estado invalidante, precisando que la sola ocurrencia o aparición del diagnóstico de una enfermedad no genera per se un estado de invalidez sino hasta que se documenten las limitaciones permanentes y definitivas

Al respecto la sala considera sin dubitación alguna que la razón acude a la junta nacional de calificación, pues solo el 14 de agosto de 2014, que la revisa el especialista en estas lides como lo es el psiquiatra y cuando ya se tiene un historial documentado real sobre lo acaecido con la demandante en el interregno entre la primera vez que acude al médico especialista si bien determina un cuadro clínico alucinatorio con RM secundario (7 de mayo de 2002) obsérvese que la junta regional de Antioquia, no hace referencia a este momento sino al 5/06/2003 del hospital Mental Homo basándose en un cuadro de alucinación auditiva

Igualmente de la observación de la historia clínica del hospital mental de Antioquia se tiene que en el registro de enfermería (7 de mayo de 2022) reseña que la paciente psiquiátrica tuvo cuadro de un mes de inestabilidad y angustia, que hace 4 años sufrió depresión reactiva y en la hoja de devolución (01 folio 88) **con seguimiento de psiquiatría de junio de 2002, del 28 de noviembre 2007, del 9 de enero 2008 y del 2 de abril de 2008 (01 folio 93) señala la tia de la demandante para esos años que “la paciente ha estado juiciosa, no ha vuelto a tener nervios, durmiendo bien en el examen mental se encuentra bien y se mantiene con los medicamentos”.**

El 28 de julio de 2008 la ESE Hospital Mental de Antioquia expide certificación que “la paciente Blanca Oliva Holguín Vázquez ingresó por primera vez a la institución desde el 7 de mayo 2002, por presentar trastorno mental debidamente certificado. Ha estado hospitalizado en varias ocasiones, asiste a controles periódicos y medicación de por vida, **su última cita fue el 28 de febrero 2009, su diagnóstico trastorno esquizoafectivo (01 folio 95)**

En la historia clínica de psiquiatría del HOMO con fecha del 24 de agosto de 2014 se lee, **“control para psicopatología mayor y para trámite de traslado**

de pensión, enfermedad actual síndrome esquizoafectivo, polo esquizo con algún deterioro cognitivo, ha pasado compensada, sin dificultades relaciones ADS ciclos biológicos, desempeño muy simple hace varios años sin consultar, pero tomando los medicamentos (01 fls. 96 a 90)

Obsérvese que en los años de 2003 a 2009, acudió en los años 2007, 2008 y 2009 con situaciones de normalidad aunque medicada y no volvió a consultar hasta el 2014 y es ahí cuando el médico psiquiatría determina las secuelas Irreversible definitivas a pesar del tratamiento y puede establecer las limitaciones funcional en la alteración de la esfera mental sin posterior recuperación, cumpliendo los criterios del decreto 917 de 1999 con base en criterios del manual único de calificación en la tabla 12.44 clase 3 que es grave con las descripciones exigidas por la citada norma, no siendo lógico, ni por reglas dela experiencia ni dela ciencia que la fecha de estructuración pueda establecerse para el inicio de los síntomas o la aparición del diagnóstico pues como lo señala la Junta Nacional de calificación “corresponde al momento en que las limitaciones del paciente alcanzan tal gravedad que al sumarse los puntajes de cada capítulo del manual único de calificación llega a superar el 50% de la pérdida de capacidad laboral”

Y es que, a partir del estudio de la historia clínica de la paciente con fundamento en la evolución documental, no obra antes del año 2002, referencia alguna a la enfermedad que permite tener criterios de ponderación de un estado de invalidez y por ende solo puede calificarse la pérdida de capacidad laboral generada por una condición clínica, sea o no invalidante al definir la Norma del manual único de calificación que corresponde al momento en que se genera la persona un grado de invalidez en forma permanente y definitiva, es decir “cuando se corrobora medicamente que las restricciones de las personas son irreversibles lo cual no puede establecerse en el inicio de una enfermedad ni en el momento mismo de sufrir una lesión sino cuando se agotan las probabilidades médicas de suministrar una recuperación al paciente” (Junta nacional de calificación)

Señala la apelante que se deben revisar sentencias de la Corte Constitucional como la T 350 de 2015, la T 012 2017, T 733 de 2018, T 213 de 2019 o la T 314 de 2019, sin embargo lo que el alto tribunal ha señalado es que las personas con discapacidad o con alguna enfermedad grave tiene protección constitucional reforzada y por ende tomarse decisión aun antes de ser calificadas por las juntas y por ello *“el juez de tutela puede recabar en el acervo probatorio que reposa en el expediente, de manera que si se allegan*

documentos diferente al dictamen de pérdida de capacidad laboral que prueba la invalidez, estos deberán ser tenidos como prueba válidas de la situación de invalidez” o “cuando la Junta de calificación fija una fecha de estructuración posterior al fallecimiento del padre del accionante, cuando este sufre una enfermedad mental desde la niñez o es una enfermedad, congénita o genética” o actualmente autorizando las medidas cautelares innominadas de las prevista en el art. 590 literal c del CGP

Situaciones diferentes a la presente en donde se ha seguido el debido proceso, el derecho de defensa y donde ni siquiera se atacó el dictamen de la junta nacional o se solicitó otro dictamen.

Por lo anterior se confirmará la decisión de la A quo, en cuanto a que la PCL mayor al 50% de la demandante, ocurrió después de la muerte del Sr Juan de la Cruz Holguín Vásquez.

2. La dependencia económica del causante al momento de la muerte

A pesar de no ser necesario referirse sobre este punto, al no salir avante el primero de los requisitos exigido por la norma, tampoco se logra claridad sobre este tópico por lo siguiente:

la Corte Suprema de Justicia ha definido unos criterios, en la sentencia SL-5605-2019, a saber:

“La dependencia deber ser:

Cierta y no presunta: «se tiene que demostrar efectivamente el suministro de recursos de la persona fallecida hacia el presunto beneficiario, y no se puede construir o desvirtuar a partir de suposiciones o imperativos legales abstractos -...».

Regular y periódica: de manera que no pueden validarse dentro del concepto de dependencia los simples regalos, atenciones, o cualquier otro tipo de auxilio eventual del fallecido hacia el presunto beneficiario;

Significativas: respecto al total de ingresos de beneficiarios; se constituyan en un verdadero soporte o sustento económico de éste; por lo que, tales asignaciones deben ser proporcionalmente representativas, en función de otros ingresos que pueda percibir el sobreviviente, de tal manera que si, por ejemplo, recibe rentas muy superiores al aporte del causante, no es dable hablar de dependencia”.

Al respecto en el interrogatorio de parte de Blanca Olivia Holguín Vásquez no se puede extraer nada pues manifestó que había muchas cosas que se le

olvidan como la fecha exacta del cumpleaños o la dirección de su casa que nunca ha trabajado la prima Eunice es la que vela por los gastos actualmente y que no se acuerda antes de la muerte de su padre quién la sostenía ni con quién convivía ni con quién se disputa la pensión

En la declaración de Eunice de Jesús Cano Vázquez, prima de la demandante manifestó que la pensión actualmente la recibe la que fue su esposa del causante. Que Blanca vivía con el papá hasta que él murió solo ellos dos en el barrio Miramar en la casa de una tía de blanca, que le pagaban arriendo. Que Juan de la Cruz se casó, dejó a la hija con la tía de blanca, pero a los dos meses regresó. Que le daba la salud, los alimentos, que la tía trabajaba y después se pensionó. Blanca toda la vida en salud estuvo en sisbén en savia salud, no ha sido beneficiaria del papá, que actualmente vive en la casa de la testigo desde que murió el papá por que la tía la tiró a la calle, viven en la casa de un hermano de la testigo. Que Blanca, que por la enfermedad mental en 2002 no ha llegado a trabajar, que la señora Blanca estuvo casada dependía del esposo y el papá la recogió ya.

De la valoración de la prueba se observa serias dudas, pues no es cierto que la demandante siempre hubiere dependido del padre, pues cuando Juan de la Cruz se casó la dejó donde la tía, sin referirse a ayuda alguna y cuando fallo su matrimonio volvió donde ella, igualmente obsérvese que Blanca estuvo casada y dependía en esos momentos del conyugue, tampoco fue beneficiaria de su padre, observándose en la declaración un ánimo de parcializado para la obtención de la pensión, más cuando señala que es enferma desde el 2002 y por eso no ha podido trabajar.

3. Costas

Solicita la apelante sea revocada las costas por cuanto se trate de una persona con enfermedad mental una persona especial protección constitucional y dado que no puede tener una determinación en sí misma.

Al respecto considera la sala que no es el momento procesal para determinar las objeciones a las costas y agencias de derecho, más cuando se tuvo la oportunidad de solicitar amparo de pobreza y no se solicitó.

En segunda instancia no se causan por las especiales condiciones de la apelante.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín, por lo expresado en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sin Costas en segunda instancia por las especiales condiciones de la apelante.

TERCERO: Las anteriores decisiones se notifican por EDICTO, conforme lo dispuesto en la providencia AL 2550, radicación 89628 del 23 de junio de 2021 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados.



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ



JUAN DAVID GUERRA TRESPALACIOS



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA



SECRETARÍA SALA LABORAL
EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

DEMANDANTE	: BLANCA OLIVA HOLGUÍN VÁZQUEZ
DEMANDADO	: COLPENSIONES, JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ Y GILMA SOTO GIRALDO
TIPO DE PROCESO	: ORDINARIO
RADICADO NACIONAL	: 05-001-31-05-015-2022-00185-01
RADICADO INTERNO	: 319-22

Magistrado Ponente
HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/148> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado el 14 de diciembre de 2023 a las 8:00am

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Se desfija el 14 de diciembre de 2023 a las 5:00pm


RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
SECRETARIO